

#### GERARDO TREJO CHAVES 2024

#### **RESUMEN**

El estudio realizado aborda la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México. Se examinaron datos que mostraron una correlación entre la distribución socioeconómica y el nivel de participación cívica, revelando una mayor participación en áreas urbanas en comparación con las rurales. Además, se identificaron diferencias en las formas de participación entre distintos estratos socioeconómicos. Se concluyó que la desigualdad económica influye en la disposición de la población para involucrarse en la esfera pública y que abordar estas disparidades es esencial para promover una participación más equitativa.

#### Contenido

l.	Introducción	1
F	Problemática abordada	6
II.	Justificación	9
III.	Planteamiento del problema	13
IV.	Objetivo	16
٧.	Marco teórico	19
VI.	Formulación de la hipótesis	31
VII	I. Pruebas cuantitativas y/o cualitativas de la hipótesis	35
VII	II. Conclusiones	46
Posibles soluciones		49
IX.	Bibliografía	51

#### I. Introducción

La Ciudad de México, un centro cultural, económico y político, es un crisol de contrastes socioeconómicos. En sus calles bulliciosas y barrios diversos, se manifiestan las dinámicas complejas de la desigualdad económica y su impacto en la participación ciudadana. Este fenómeno, objeto de estudio en numerosas investigaciones y debates académicos, revela una red intricada de causas y efectos que moldean la vida cotidiana de sus habitantes.

Para comprender la interrelación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México, es esencial abordar ambos conceptos desde diversas perspectivas. La desigualdad económica se refiere a la disparidad en la distribución de recursos materiales y oportunidades entre los miembros de una sociedad, mientras que la participación ciudadana implica el grado en que los individuos se involucran en la vida política, social y comunitaria de su entorno.

En el contexto de la Ciudad de México, la desigualdad económica se manifiesta de múltiples formas. Por un lado, existen marcadas brechas de ingresos entre los diferentes estratos sociales, con una considerable parte de la población enfrentando dificultades económicas para satisfacer sus necesidades básicas. Esta disparidad se refleja en la distribución desigual de la riqueza, el acceso desigual a la educación y la salud, así como en la segregación espacial que perpetúa la marginación de ciertas comunidades.

La desigualdad económica también se entrelaza con la exclusión social y la discriminación, especialmente hacia grupos históricamente marginados como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las personas con discapacidad. Esta marginalización socioeconómica mina la cohesión social y debilita el tejido comunitario, dificultando la participación ciudadana significativa.

Por otro lado, la participación ciudadana en la Ciudad de México se ve influenciada por una serie de factores, incluyendo el acceso a la información, la confianza en las instituciones públicas y la percepción de la eficacia de la participación individual. Si bien la Ciudad de México cuenta con una rica tradición de movimientos sociales y activismo comunitario, la participación ciudadana tiende a ser desigualmente distribuida, con ciertos grupos teniendo más voz y poder que otros.

La desigualdad económica afecta la participación ciudadana de múltiples maneras. En primer lugar, las personas que enfrentan dificultades económicas pueden tener menos tiempo, recursos y energía para participar en actividades cívicas o políticas. La lucha diaria por sobrevivir puede relegar la participación ciudadana a un segundo plano, especialmente para aquellos que luchan por satisfacer sus necesidades básicas.

Además, la desigualdad económica puede erosionar la confianza en las instituciones públicas y en el sistema político en su conjunto. Cuando la distribución de recursos y oportunidades es percibida como injusta o sesgada, los ciudadanos pueden volverse escépticos respecto a la capacidad de las instituciones para abordar sus preocupaciones y representar sus intereses.

El objetivo de esta investigación es analizar de manera integral la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México. A través de un enfoque multidisciplinario que combina la revisión de literatura, el análisis de datos y posiblemente la realización de entrevistas, buscamos comprender cómo la disparidad en la distribución de recursos y oportunidades económicas impacta la capacidad de los ciudadanos para involucrarse activamente en la vida política, social y comunitaria de la metrópolis mexicana. Nuestra investigación tiene como propósito identificar los mecanismos a través de los cuales la desigualdad económica puede influir en la participación ciudadana, así como explorar posibles estrategias para promover una participación más inclusiva y equitativa en la Ciudad de México.

Una pregunta de investigación clave que guiará nuestra indagación es: ¿Cómo afecta la desigualdad económica en la Ciudad de México la capacidad de los ciudadanos para participar de manera significativa en la vida política y comunitaria? Esta pregunta nos permitirá explorar las diversas dimensiones de la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana, abordando tanto los factores que pueden obstaculizar la participación como las posibles soluciones y estrategias para promover una mayor inclusión y equidad en el proceso de toma de decisiones en la Ciudad de México.

La elección de una metodología de investigación de corte cuantitativo se justifica por la naturaleza del fenómeno estudiado, que implica variables medibles y la necesidad de establecer relaciones causales o correlaciones entre ellas. En el caso de la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México, el enfoque cuantitativo nos permitirá utilizar datos estadísticos para analizar patrones, tendencias y asociaciones entre variables relevantes, como ingresos, nivel educativo, participación en actividades cívicas, entre otras. Este enfoque nos brinda la posibilidad de obtener resultados objetivos y generalizables, así como de identificar posibles vínculos entre la desigualdad económica y la participación ciudadana a partir de evidencia empírica.

El diseño de la investigación comprenderá una introducción donde se contextualice el tema y se expongan los objetivos del estudio, seguido por un marco teórico que explore la literatura existente sobre la desigualdad económica y la participación ciudadana, proporcionando un fundamento teórico para el análisis. Posteriormente, se formularán hipótesis que establecerán relaciones esperadas entre las variables estudiadas, basadas en la revisión teórica y en la evidencia empírica previa. Luego, se llevará a cabo un análisis de datos estadísticos para evaluar la validez de estas hipótesis, utilizando técnicas cuantitativas apropiadas. Finalmente, se presentarán las conclusiones del estudio, resumiendo los hallazgos obtenidos y discutiendo sus

implicaciones para la comprensión de la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México.

La segregación socioeconómica también puede crear barreras físicas y simbólicas que obstaculizan la participación ciudadana. En la Ciudad de México, la polarización espacial entre barrios ricos y pobres puede limitar las oportunidades de interacción y colaboración entre diferentes grupos sociales, dificultando la construcción de coaliciones y alianzas que promuevan el cambio social.

A pesar de estos desafíos, la Ciudad de México también es un escenario vibrante de resistencia y activismo ciudadano. Desde movimientos estudiantiles hasta iniciativas de base que buscan mejorar las condiciones de vida en las comunidades marginadas, hay numerosos ejemplos de ciudadanos que se organizan y movilizan para promover el cambio social y político.

Sin embargo, para que la participación ciudadana sea verdaderamente inclusiva y significativa, es necesario abordar las raíces estructurales de la desigualdad económica. Esto implica políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, redistribución de la riqueza y acceso equitativo a servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda.

Además, es fundamental fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y garantizar que todas las voces sean escuchadas y tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones. Esto requiere medidas para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión en la formulación de políticas públicas.

La relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México es compleja y multifacética. Si bien la desigualdad económica puede socavar la participación ciudadana al crear barreras materiales y simbólicas, también puede servir como un catalizador para la acción colectiva y la movilización social. Para construir una sociedad más justa y democrática, es imperativo abordar

tanto la desigualdad económica como los obstáculos estructurales que limitan la participación ciudadana, trabajando hacia un futuro donde todos los habitantes de la Ciudad de México tengan igualdad de oportunidades para participar plenamente en la vida política y social de su comunidad.

#### Problemática abordada

La problemática abordada en esta investigación gira en torno a la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México, una metrópolis marcada por contrastes socioeconómicos y una vibrante vida política y social. La desigualdad económica, caracterizada por la disparidad en la distribución de recursos y oportunidades entre los habitantes de la ciudad, se manifiesta en diversos aspectos de la vida cotidiana, desde la segregación espacial hasta las brechas de ingresos y acceso a servicios básicos. Este fenómeno, intrínsecamente ligado a la exclusión social y la discriminación, plantea desafíos significativos para la participación ciudadana, entendida como la capacidad de los individuos para involucrarse activamente en la vida política, social y comunitaria de su entorno.

La Ciudad de México, con su vasta diversidad cultural y socioeconómica, ofrece un escenario complejo para examinar la interrelación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana. Por un lado, la ciudad alberga a una población diversa, desde comunidades indígenas hasta migrantes internacionales, cada una enfrentando diferentes niveles de acceso a recursos y oportunidades. Por otro lado, la riqueza cultural y la historia de movimientos sociales y activismo político en la ciudad reflejan un potencial significativo para la participación ciudadana. Sin embargo, la desigualdad económica puede actuar como un obstáculo para la participación significativa, limitando el acceso de ciertos grupos a los espacios de toma de decisiones y perpetuando ciclos de exclusión y marginalización.

Una de las principales problemáticas que enfrenta la Ciudad de México es la brecha socioeconómica que separa a sus habitantes, exacerbada por una distribución desigual de la riqueza y el acceso desigual a oportunidades económicas. Esta desigualdad se manifiesta en la segregación espacial entre barrios ricos y pobres, donde las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo varían drásticamente. Mientras que en áreas privilegiadas se encuentran servicios de

calidad, infraestructura adecuada y acceso a empleos bien remunerados, en las zonas marginadas se enfrentan carencias de servicios básicos, altos niveles de violencia y pobreza extrema. Esta disparidad en la calidad de vida crea barreras materiales y simbólicas que limitan la participación ciudadana, ya que aquellos que enfrentan dificultades económicas tienen menos tiempo, recursos y energía para involucrarse en actividades políticas y comunitarias.

Además, la desigualdad económica en la Ciudad de México se entrelaza con la exclusión social y la discriminación, especialmente hacia grupos históricamente marginados como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las personas con discapacidad. Estos grupos enfrentan barreras adicionales para participar en la vida política y social de la ciudad, desde la falta de acceso a la educación y el empleo hasta la discriminación en el acceso a servicios públicos y la representación política. Esta exclusión socava la cohesión social y debilita el tejido comunitario, dificultando la construcción de coaliciones y alianzas que promuevan el cambio social y político.

Otra problemática relevante es la falta de confianza en las instituciones públicas y en el sistema político en su conjunto, exacerbada por la percepción de corrupción, ineficacia e injusticia. Cuando los ciudadanos perciben que las instituciones no responden a sus necesidades ni representan sus intereses de manera equitativa, es menos probable que participen activamente en la vida política y comunitaria.

Esta falta de confianza puede llevar a la apatía política, la desmovilización y la alienación de amplios sectores de la población, especialmente aquellos que se sienten excluidos o marginados por el sistema.

Por último, la segregación socioeconómica y la fragmentación urbana en la Ciudad de México también plantean desafíos para la construcción de una ciudadanía activa y comprometida. La polarización espacial entre barrios ricos y pobres puede limitar las oportunidades de interacción y colaboración entre diferentes grupos sociales, dificultando la construcción de coaliciones y alianzas que promuevan el cambio

social y político. Además, la falta de infraestructura comunitaria y espacios públicos accesibles puede obstaculizar la organización y movilización de la ciudadanía, especialmente en las áreas más marginadas y empobrecidas de la ciudad.

La problemática de la desigualdad económica y su impacto en la participación ciudadana en la Ciudad de México es multifacética y compleja. La brecha socioeconómica que separa a los habitantes de la ciudad, la exclusión social y la discriminación, la falta de confianza en las instituciones públicas y la segregación urbana son solo algunas de las dimensiones de este fenómeno.

Para abordar esta problemática de manera efectiva, es necesario adoptar un enfoque integral que combine políticas de redistribución de la riqueza con medidas para fortalecer la participación ciudadana y promover la inclusión social y política de todos los habitantes de la Ciudad de México.

#### II. Justificación

La realización de esta investigación es crucial debido a la relevancia y la complejidad de la problemática abordada: la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México. En primer lugar, entender esta relación es fundamental para comprender los desafíos socioeconómicos y políticos que enfrenta la ciudad, ya que la desigualdad económica puede ser tanto causa como consecuencia de la falta de participación ciudadana. Comprender cómo la disparidad en la distribución de recursos y oportunidades afecta la capacidad de los ciudadanos para involucrarse activamente en la vida política y social es esencial para desarrollar políticas públicas efectivas y equitativas que promuevan la inclusión y el desarrollo sostenible en la Ciudad de México.

Además, esta investigación puede arrojar luz sobre las dinámicas subyacentes que perpetúan la desigualdad económica y la exclusión social en la ciudad, lo que puede ayudar a identificar posibles puntos de intervención para abordar estos problemas de manera más efectiva. Al comprender cómo la desigualdad económica afecta la participación ciudadana, podemos desarrollar estrategias más informadas para promover una mayor equidad y justicia social en la Ciudad de México, fortaleciendo así el tejido social y fomentando el desarrollo humano integral de todos sus habitantes.

Por otro lado, esta investigación también puede contribuir al avance del conocimiento académico en el campo de los estudios urbanos, la sociología y la ciencia política, proporcionando nuevos enfoques metodológicos para estudiar la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en contextos urbanos. Al analizar datos cuantitativos y cualitativos sobre este tema, podemos generar conocimiento empírico que pueda ser utilizado por otros investigadores,

académicos y formuladores de políticas para informar sus propias investigaciones y prácticas profesionales.

Además, la realización de esta investigación puede tener implicaciones prácticas significativas para la formulación de políticas públicas en la Ciudad de México y otras ciudades de América Latina y el mundo que enfrentan desafíos similares en términos de desigualdad económica y participación ciudadana. Al proporcionar evidencia empírica sobre los vínculos entre la desigualdad económica y la participación ciudadana, esta investigación puede ayudar a informar la elaboración de políticas que promuevan una distribución más equitativa de los recursos y oportunidades, así como la participación inclusiva de todos los ciudadanos en la vida política y social de sus comunidades.

La realización de esta investigación es importante porque aborda una problemática clave en la Ciudad de México y otras ciudades del mundo: la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana. Al comprender esta relación y sus implicaciones para el desarrollo urbano y la equidad social, podemos contribuir al diseño de políticas más efectivas y justas que promuevan el bienestar y la inclusión de todos los habitantes de la Ciudad de México y más allá.

El análisis de la relevancia del tema estudiado para el rubro de gasto reportado revela una conexión fundamental entre la distribución de recursos y la participación ciudadana en la Ciudad de México. Los datos muestran que el gasto reportado en áreas como educación, salud, vivienda y servicios sociales está estrechamente relacionado con la desigualdad económica y la participación ciudadana.

Por ejemplo, las áreas con altos niveles de desigualdad económica tienden a experimentar una mayor demanda de servicios sociales y una menor participación ciudadana debido a las barreras económicas y sociales que enfrentan los residentes. Esta situación puede resultar en una mayor presión sobre el gasto

reportado en servicios sociales y una menor efectividad en términos de impacto social debido a la falta de participación y compromiso de la comunidad.

Una propuesta de solución para abordar esta problemática es implementar políticas públicas que promuevan una distribución más equitativa de los recursos y fomenten una participación ciudadana más inclusiva y activa. Esto podría incluir medidas como aumentar la inversión en programas de educación y capacitación para mejorar las habilidades y oportunidades laborales de los grupos marginados, así como la implementación de programas de vivienda asequible y desarrollo comunitario que fomenten la integración social y la cohesión en áreas desfavorecidas.

Desarrollar el tema de estudio sobre la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México conlleva una serie de beneficios significativos. En primer lugar, al comprender mejor cómo la desigualdad económica afecta la participación ciudadana, podemos identificar áreas clave de intervención para abordar la exclusión social y promover una mayor inclusión y equidad en la ciudad. Esto puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México al garantizar un acceso más igualitario a recursos y oportunidades.

Además, desarrollar este tema de estudio puede contribuir al avance del conocimiento en campos como los estudios urbanos, la sociología y la ciencia política, proporcionando nuevas perspectivas y enfoques para comprender la complejidad de las dinámicas sociales y políticas en contextos urbanos. Esto puede enriquecer el debate académico y proporcionar enfoques útiles para otros investigadores, académicos y formuladores de políticas interesados en temas relacionados con la desigualdad económica y la participación ciudadana.

Otro beneficio importante es que el desarrollo de este tema de estudio puede proporcionar evidencia empírica que respalde la formulación de políticas públicas más efectivas y equitativas en la Ciudad de México y más allá. Al basar las

decisiones políticas en datos concretos sobre cómo la desigualdad económica afecta la participación ciudadana, podemos desarrollar estrategias más informadas y sostenibles para abordar los desafíos sociales y promover un desarrollo más inclusivo y sostenible en la ciudad.

En resumen, desarrollar el tema de estudio sobre la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México puede generar una serie de beneficios, desde mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad hasta contribuir al avance del conocimiento académico y respaldar la formulación de políticas públicas más efectivas y equitativas.

Además, sería crucial fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, como los consejos vecinales y las consultas públicas, para garantizar que todas las voces sean escuchadas en el proceso de toma de decisiones y que los recursos se asignen de manera equitativa y transparente en función de las necesidades y prioridades de la comunidad. En última instancia, estas medidas podrían contribuir a reducir la desigualdad económica, mejorar la eficacia del gasto reportado y promover un desarrollo más inclusivo y sostenible en la Ciudad de México.

#### III. Planteamiento del problema

El problema de investigación planteado sin ambigüedad es esencial para guiar el estudio de manera efectiva. En este caso, la pregunta de investigación claramente formulada sería: "¿Cuál es la naturaleza y la magnitud de la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México?" Esta pregunta enfoca la atención en la interacción entre dos variables clave: la desigualdad económica y la participación ciudadana.

Al plantear la pregunta de esta manera, se establece un marco claro para explorar cómo la disparidad en la distribución de recursos y oportunidades económicas afecta la capacidad de los ciudadanos para involucrarse activamente en la vida política, social y comunitaria de la ciudad. Esta formulación precisa del problema de investigación ayuda a delimitar el alcance del estudio y a identificar los aspectos específicos que se abordarán en la investigación. Además, proporciona una base sólida para la recopilación y análisis de datos, así como para la elaboración de conclusiones y recomendaciones basadas en evidencia empírica.

La posibilidad de realizar pruebas empíricas utilizando un enfoque cuantitativo en esta investigación es alta y altamente recomendada dada la naturaleza del problema de investigación. El enfoque cuantitativo nos permite recopilar datos numéricos sobre variables específicas relacionadas con la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México. Esto puede incluir datos demográficos, indicadores económicos, encuestas de participación ciudadana, ingresos familiares, acceso a servicios básicos y otros factores relevantes.

Con un enfoque cuantitativo, podemos diseñar y llevar a cabo encuestas representativas a nivel poblacional para recopilar datos sobre las percepciones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos en relación con la participación ciudadana y la desigualdad económica. Además, podemos recopilar datos secundarios de fuentes confiables como el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI) y el gobierno local, que pueden proporcionar información detallada sobre indicadores socioeconómicos y políticos relevantes.

Una vez recopilados los datos, podemos utilizar técnicas estadísticas para analizar la relación entre las variables de interés. Por ejemplo, podríamos realizar análisis de regresión para examinar la asociación entre la desigualdad económica y diferentes formas de participación ciudadana, controlando por variables de confusión como la edad, el género, el nivel educativo y la ubicación geográfica. Además, podríamos utilizar análisis de correlación para explorar las relaciones entre diferentes dimensiones de la desigualdad económica (por ejemplo, ingresos, educación, acceso a servicios) y diferentes formas de participación ciudadana (por ejemplo, votación, membresía en organizaciones comunitarias, participación en protestas).

Los resultados de estas pruebas empíricas nos proporcionarán información valiosa sobre la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México. Esta evidencia estadística nos permitirá identificar patrones, tendencias y posibles mecanismos subyacentes que influyen en esta relación, lo que a su vez puede informar el desarrollo de políticas públicas y programas de intervención destinados a promover una participación ciudadana más inclusiva y equitativa en la ciudad. En resumen, el enfoque cuantitativo nos ofrece una metodología robusta y rigurosa para investigar esta problemática y generar conocimiento empírico que puede contribuir a abordar los desafíos socioeconómicos y políticos en la Ciudad de México.

La delimitación de la investigación es crucial para establecer claramente los límites y alcances de estudio, identificando qué aspectos serán analizados y cuáles no. En el caso de esta investigación sobre la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México, es importante delimitar varios aspectos para enfocar adecuadamente el estudio.

Es fundamental definir claramente los conceptos de desigualdad económica y participación ciudadana que serán objeto de análisis. La desigualdad económica puede entenderse en términos de ingresos, riqueza, acceso a oportunidades económicas y sociales, entre otros aspectos. Por otro lado, la participación ciudadana puede abarcar una variedad de formas, como la participación en elecciones, actividades comunitarias, movimientos sociales y protestas. Es importante especificar qué dimensiones específicas de la desigualdad económica y la participación ciudadana serán investigadas en este estudio.

Además, se deben establecer límites geográficos y temporales para la investigación. En este caso, la investigación se centrará específicamente en la Ciudad de México como contexto de estudio, excluyendo otras áreas geográficas. Del mismo modo, es importante definir el período de tiempo que se analizará, considerando factores como cambios políticos, sociales y económicos que puedan afectar la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la ciudad.

Otra delimitación importante es la selección de variables y factores que serán considerados en el análisis. Esto puede incluir variables socioeconómicas como ingresos, nivel educativo, acceso a servicios básicos, así como factores políticos como la confianza en las instituciones y la participación electoral. Es fundamental definir claramente qué variables serán incluidas y cuáles serán excluidas del análisis, con el fin de enfocar el estudio en los aspectos más relevantes y significativos de la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México.

#### IV. Objetivo

El objetivo de la investigación es analizar de manera integral la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México. Este objetivo implica explorar cómo la disparidad en la distribución de recursos y oportunidades económicas afecta la capacidad de los ciudadanos para involucrarse activamente en la vida política, social y comunitaria de la metrópolis mexicana.

La investigación busca comprender las dinámicas subyacentes que vinculan la desigualdad económica con la participación ciudadana, así como identificar posibles estrategias para promover una participación más inclusiva y equitativa en la Ciudad de México. En última instancia, el objetivo es generar conocimiento empírico que contribuya al desarrollo de políticas públicas efectivas y sostenibles destinadas a abordar los desafíos socioeconómicos y políticos en la ciudad, promoviendo un desarrollo más inclusivo y equitativo para todos sus habitantes.

El propósito principal de esta investigación es generar conocimiento empírico y análisis rigurosos que permitan comprender de manera integral la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México. Este conocimiento tiene varios propósitos clave:

En este sentido, se busca identificar los mecanismos y las dinámicas subyacentes que vinculan la desigualdad económica con la participación ciudadana en la ciudad. Esto implica analizar cómo la disparidad en la distribución de recursos y oportunidades económicas afecta la capacidad de los ciudadanos para involucrarse en la vida política, social y comunitaria, así como identificar posibles factores mediadores y moderadores de esta relación.

La investigación tiene como propósito generar evidencia empírica que respalde el diseño de políticas públicas y programas de intervención destinados a abordar los desafíos socioeconómicos y políticos asociados con la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México. Esto implica proporcionar datos y

análisis que puedan informar la formulación de políticas orientadas a promover una participación ciudadana más inclusiva y equitativa, así como a reducir las brechas socioeconómicas en la ciudad.

El problema a tratar es la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México. El estudio busca comprender cómo la disparidad en la distribución de recursos y oportunidades económicas afecta la capacidad de los ciudadanos para involucrarse activamente en la vida política y comunitaria. El análisis de esta relación podría ayudar a identificar los factores subyacentes que perpetúan la exclusión social y la marginalización, proporcionando así una base empírica para el diseño de políticas públicas y programas de intervención que promuevan una participación más inclusiva y equitativa.

Al comprender mejor los mecanismos que vinculan la desigualdad económica con la participación ciudadana, se podrían desarrollar estrategias más efectivas para abordar las brechas socioeconómicas en la ciudad y fomentar un mayor compromiso cívico y político entre todos los sectores de la población.

#### **Objetivos particulares**

Para llevar a buen puerto la investigación, tenemos que desarrollar los siguientes objetivos particulares, pues estos, nos conducirán a buen puerto para lograr la emta cometida:

- Analizar la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México mediante un enfoque cuantitativo y cualitativo.
- 2. Identificar los factores que influyen en la capacidad de los ciudadanos para participar de manera activa en la vida política y comunitaria, considerando variables socioeconómicas, demográficas y contextuales.

- 3. Explorar las diferentes formas de participación ciudadana en la Ciudad de México y cómo estas pueden estar influenciadas por la desigualdad económica, incluyendo la participación en elecciones, actividades comunitarias, movimientos sociales y protestas.
- 4. Evaluar el impacto de la desigualdad económica en la eficacia y representatividad de los procesos políticos y decisiones en la ciudad, así como en la cohesión social y la calidad de vida de los habitantes
- 5. Proponer estrategias y recomendaciones de políticas públicas que puedan contribuir a promover una participación ciudadana más inclusiva y equitativa, así como a reducir las brechas socioeconómicas en la Ciudad de México

Estos objetivos específicos guiarán el proceso de investigación y permitirán obtener un análisis detallado y completo de la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México, así como identificar posibles áreas de intervención para abordar este problema de manera efectiva.

#### V. Marco teórico

Menciona Engel (2006) que la pobreza y la desigualdad son fenómenos tan antiguos como la historia de la humanidad, un asunto que únicamente era atendido por medio acciones filantrópicas atendidas por motivos éticos o religiosos. La concepción únicamente cambió cuando pasó a ser una cuestión de Estado, las políticas dirigidas a los pobres tomaron la forma de asistencia social que buscaba garantizar mínimos básicos de supervivencia.

Para entender la naturaleza de las políticas públicas actuales enfocadas en combatir la pobreza es indispensable situarlas por su contexto y temporalidad. La transición hacia la responsabilidad del Estado ocurrió en la década de los sesentas, cuando la sociedad civil comenzó a exigir asistencia social para los grupos más vulnerables (Engel, 2006).

Hacia finales de la década de 1970 la crisis económica desatada por el aumento de la tasa de interés internacional ocasionó severos problemas de desempleo, y una peligrosa combinación de alta inflación y estancamiento económico, a lo que se le denominó como estanflación en diversos países del mundo. El agotamiento de las políticas keynesianas, ampliamente utilizadas desde finales de la Segunda Guerra Mundial basadas en la expansión del gasto público para estimular la actividad económica fue evidente.

La intervención gubernamental en la actividad económica fue identificada como uno de las principales causas de la problemática, por lo que a principios de la década de 1980 se comenzaron a implementar agresivas políticas de liberalización para tratar de recuperar dinamismo económico, pero ésta vez impulsado por las empresas privadas, limitando al mismo tiempo la participación de los gobiernos en la economía.

Bajo este contexto, los mercados de trabajo se vieron afectados al ser abandonados por los gobiernos y sus políticas corporativistas, provocando fuertes disminuciones

salariales y aumento del desempleo como medida para aligerar costos, ya que las empresas trataban de mantener su rentabilidad considerando la crisis por la que se atravesaba. El empeoramiento de las condiciones de los trabajadores acompañado de mayor desempleo ocasionó que los trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo se situaran como un grupo vulnerable, de manera que las políticas públicas debían dar solución a la problemática.

#### Evaluación de las primeras políticas públicas

A partir de la década de los años ochenta se comienzan a realizar estudios sobre las causas y los síntomas de la pobreza y la desigualdad, con sus consecuencias negativas desde el punto de vista humano, social, económico, político y ambiental. En un mundo globalizado, urbanizado y dotado de medios de comunicación de amplia cobertura, la discrepancia absoluta entre el ideal de igualdad y una realidad con altos niveles de pobreza y desigualdad se convierte en un verdadero "barril de pólvora" (Engel, 2006, p. 7).

En la década de 1990, se implementaron políticas públicas que centraron sus esfuerzos en el ámbito económico, a través de garantizar un nivel de ingreso que fuese suficiente para asegurar la supervivencia. Sin embargo, la perspectiva cambio a comienzos del siglo XXI con la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el que participaron 189 países con el objetivo de reducir la pobreza extrema a la mitad de lo existente para el año 2015.

Apunta Engels (2006) que previo a la adopción de los Objetivos del Milenio, el Banco Mundial publicó un informe con datos reveladores acerca de las políticas para combatir la pobreza. Se identificó que los países habían realizado importantes esfuerzos en el ámbito económico, volvieron a registrar de nueva cuenta crecimiento, sin embargo, de manera paralela se vio que la pobreza extrema no disminuyó e, incluso, la pobreza "tradicional" se incrementó; el problema fue más notorio en aquellos países con altos índices de desigualdad.

Esto se debió a que lo población en pobreza extrema no tuvo acceso a las políticas sociales, mientras que la población en pobreza "tradicional" además de lo económico, se veía afectada por otros tipos de carencias. El informe destaca la pobreza como un problema multidimensional, por lo que además de lo económico, es necesario tomar acciones en aspectos sociales y humanos, destacado la importancia de una red de protección social.

Para el caso de América Latina y específicamente para México la evaluación del éxito de las políticas públicas no es unánime. Para Engel (2006) Brasil, Chile y México fueron casos de éxito debido implementaron estrategias integrales que generaron efectos sinérgicos para disminuir los costos operacionales y aumentan la eficacia y la eficiencia de las políticas de reducción de la pobreza. Engel (2006) destaca la oferta convergente de programas de generación de trabajo e ingresos, desarrollo humano y social, y protección social; la integración articulada de diferentes niveles de gobierno; y la modalidad participativa de implementación Además, señala que la utilización de mecanismos de focalización geográfica o en unidades familiares contribuyó ampliamente a hacer llegar este conjunto articulado de programas a los más pobres, proporcionándoles oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Por otro lado, algunos autores señalan errores importantes al momento de diseñar las políticas públicas que limitaron su alcance. Para Verdera (2007) definir, medir e identificar políticas solo es una parte de la labor, ésta debe ser complementada con un análisis de las causas para la formulación de políticas enfocadas en combatir la pobreza. Desde su perspectiva, debería inscribirse de manera explícita en una teoría o enfoque sobre la pobreza, que permita aclarar cómo se define la pobreza, ya que, distintas definiciones, forzosamente implican el uso de indicadores diferentes para su medición. De esta manera, se conduce hacia la identificación de diferentes individuos y grupos como pobres, requiriendo propuestas diversas de política para la reducción de la pobreza.

Así, la pobreza y la forma de enfrentarla es tratada como un problema social, separable de la falta de empleos e ingresos, del contexto mayor de falta de desarrollo, de las tendencias de crecimiento y, especialmente de las políticas económicas que generan o preservan la enorme desigualdad en la distribución del ingreso e, incluso, que aumentan la pobreza, como son la política de contención salarial mediante el freno a la negociación colectiva, de salarios mínimos reales fuertemente rezagados o de reducción del gasto público social corriente (Verdera, 2007, p.246).

La agenda 2030 de la ONU<sup>1</sup> y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 (ODS 1)

Como se mencionó anteriormente, el primer esfuerzo en realizado en conjunto a nivel internacional para erradicar la pobreza fue mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la ONU en la que participaron 189 países para cumplir con 8 objetivos. Esta agenda marcó los esfuerzos de 2000 a 2015, cuyo primer objetivo fue reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre en el mundo.

En el año 2015 los Objetivos del Milenio fueron sustituidos por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La nueva agenda engloba el esfuerzo de 193 países estableciendo 17 Objetivos y 169 metas para lograr el desarrollo en el periodo 2015-2030. Tras el éxito alcanzado en la reducción de la pobreza y el hambre a través de los Objetivos del Milenio, la Agenda 2030 se propuso erradicar la pobreza extrema de manera definitiva para el final del periodo, estipulado como el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 1).

Para el caso de México y los países que conforman la región Latinoamérica, la CEPAL fue el organismo encargado de acompañarlos y apoyarlos en el proceso de implementación y seguimiento de la Agenda y los ODS, a través de sus capacidades analíticas, técnicas y humanas (Naciones Unidas, 2018).

22

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/acerca-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible#:~:text=La%20Agenda%202030%20representa%20entonces,y%20la%20prevenci%C3%B3n%20de %20conflictos.

Ei informe de las Naciones Unidas (2018) indica que, aunque los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad para 2015 en comparación con 1990, aún 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo aún vivía con menos de 1,25 dólares al día, y había muchos más millones de personas que ganan poco más de esa cantidad diaria, a lo que se añade que hay muchas personas en riesgo de recaer en la pobreza.

"La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción de decisiones. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad" (Naciones Unidas, 2018).

Bajo esta idea, se muestra de manera resumida las metas a alcanzar consideradas por el ODS 1. Puede observarse de acuerdo a lo planteado que, a pesar de las buenas intenciones existentes para erradicar la pobreza, no se especifica la forma de lograrlo. A manera de complemento se presenta consideraciones adicionales sobre los lineamientos que deben seguir los países en la formulación de sus políticas públicas para el cumplimiento de las 5 primeras metas, con el objetivo conjunto de erradicar la pobreza extrema.

A pesar de lo estipulado por los organismos internacionales respecto al diseño y la implementación de las políticas públicas, lo forma de ser llevadas a cabo por cada país influye directamente en los resultados obtenidos.

En el caso de México contrastan dos puntos de vista sobre la influencia de los organismos en el diseño de las políticas, tanto a favor como en contra. Cabe resaltar que ambas posturas coinciden en la crítica de los resultados obtenidos, enfocándose en diferentes razones.

Así por ejemplo, Gómez (2009) destaca que a pesar de que la cantidad de recursos públicos para el combate de la pobreza aumentó, los resultados obtenidos son ineficaces. Señala que una de las razones fundamentales de la baja eficiencia se debió a la poca influencia que ejerció la línea oficial internacional en el diseño de las políticas públicas en México, de manera que las autoridades ignoraron las discusiones que fueron realizadas a lo largo de las últimas cuatro décadas.

Para la autora, a pesar de que la discusión internacional no refleja un consenso sobre la definición de pobreza, la mejor manera de medirla, ni sus causas, sí refleja un vasto y sofisticado debate que llama la atención sobre la importancia de reconocer explícitamente las implicaciones de la definición y el método de medición empleado para los resultados (Gómez, 2009, p.109). Así, la conceptualización de pobreza en México ha sido más parte del problema que dé una solución para el asunto, ya que, si la experiencia internacional se hubiera tomado en cuenta en México, los problemas en la conceptualización y de las políticas pudieron haberse evitado.

En contraste, a consideración de Verdera (2007) es un error que se propongan e implementen políticas como recetas casi universales para sectores, o en aspectos como educación, salud y nutrición sin contar con un mínimo análisis de sus causas estructurales. Esto se debe a que los países se limitan a la medición periódica de la tasa de pobreza y a tratar de mejorar la efectividad de sus principales acciones contra la pobreza, con evaluaciones parciales de algunos programas importantes para mejorar su focalización e impacto.

Independientemente de la discusión acerca del diseño, implementación y resultados de las políticas pública, es relevante señalar la forma en la que fue efectuada. Señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que las mediciones realizadas por el Banco Mundial que se basan en el ingreso son las más conocidas y han estado sujetas a crítica por su simplificación. Así, el Banco Mundial definió originalmente dos umbrales: hasta 1 dólar por persona al día para pobreza extrema

y hasta 2 dólares por persona al día para pobreza, siendo ajustados en 2011 a 1.90 dólares para pobreza extrema y 3.20 dólares para pobreza (CNDH, 2019).

Para el caso de México, en 2003 se adoptó por primera vez una medición oficial basada en el ingreso. Se crearon tres líneas nacionales usando tres "canastas" de bienes y servicios para establecer tres líneas o puntos de corte. Posteriormente, a partir de 2004 la medición de la pobreza le fue otorgada al CONEVAL, con el mandato de medir la pobreza en un nivel multidimensional, considerando, por una parte, el ingreso y, por otra, un conjunto de seis carencias sociales relacionadas con derechos sociales incluidos en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS)<sup>2</sup>.

Para la dimensión de ingreso establece dos umbrales: la línea de bienestar (LB) que equivale al costo de la canasta básica y la línea de bienestar mínimo (LBM) que equivale al costo de la canasta alimentaria.' Las seis carencias consideradas en la medición oficial de CONEVAL son el rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, condiciones y espacios de la vivienda, servicios de la vivienda y acceso a la alimentación. Según la medición oficial, multidimensional, las personas en pobreza son las que tienen ingreso inferior a la línea de bienestar y al menos presentan una carencia social (CNDH, 2019, p.7).

Utilizando esta metodología, los resultados respecto a la evolución de la pobreza a nivel nacional resultan alarmantes. Esto debida a que los datos de 2016 mostraban que la mitad de la población carecía de ingreso suficiente para adquirir la canasta básica, un total de 62 millones de persona. Además, 53 millones de personas que representaba el 44 % de la población presentaba al menos una carencia social, de las cuales, destacaba falta de acceso a la seguridad social afectaba al 56 % de la población, (68 millones de personas), mientras que la carencia social con menor incidencia es la carencia por espacios y condiciones de la vivienda, ya que solo

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Observar en: <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDS.pdf">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDS.pdf</a>

afectaba 15 % de la población. Asimismo, la carencia que más se redujo fue la falta de acceso a servicios de salud, bajando del 33 % en 2010 al 19 % en 2016.

Los datos publicados por la CONEVAL revelaron cifras de población en pobreza similares a las condiciones existentes 25 años atrás, haciendo surgir un cuestionamiento sobre la eficiencia de las políticas sociales, sobre todo al considerar que el presupuesto para su combate se había triplicado.

El banderazo de la política social contemporánea en México se dio con la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) en 1988 bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, dirigido a atender 41 millones de mexicanos que vivían en condiciones de pobreza tanto a nivel rural como urbana, poniendo especial atención a los 17 millones que estaban en condiciones de pobreza extrema. El programa fue altamente criticado por diversas razones: sus efectos diluidos por su diversidad, sus altos costos, y su uso como mecanismo para la manipulación política que beneficiaba a aquellos que estaban mejor organizados, pero no necesariamente a los más necesitados (Martínez Flores & Benavides Rincón, 2018, p.89).

Para lograr sus objetivos, el programa propuso un modelo de intervención con los siguientes rasgos principales: entrega directa de transferencias monetarias a las familias para mejorar el consumo del hogar y como incentivo para el desarrollo de capital humano; integralidad de acciones en materia de educación, salud y alimentación; focalización de hogares en pobreza extrema mediante métodos estadísticos rigurosos; corresponsabilidad de los hogares beneficiarios en el cumplimiento de requisitos asociados al desarrollo de capital humano; inclusión de un sistema de monitoreo y evaluación de impacto; y coordinación intersecretarial de las acciones de política (Hernández et al., 2019 pp.36-37)

Progresa fue un programa innovador y la base de los subsecuentes programas puestos en marcha. De hecho, señala Hernández et al. (2019) el programa se

mantuvo durante cuatro administraciones presidenciales con la peculiaridad de ser renombrado y modificado de acuerdo a objetivos específicos de cada gobierno.

En el año 2002 Durante la administración de Vicente Fox el programa fue renombrado como Oportunidades. Entre los cambios más importantes, se encuentran la expansión de la cobertura del programa a localidades semiurbanas y urbanas, con el mismo modelo de intervención utilizado para el medio rural, la extensión de las becas educativas hasta el nivel medio superior y la creación de dos nuevos componentes denominados Jóvenes con Oportunidades y Apoyo a Adultos Mayores (Hernández et al., 2019).

El siguiente cambio ocurrió en 2014 en la administración de Enrique Peña Nieto, convirtiéndose en el Programa de Inclusión Social (Prospera), siendo la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Estrategia Nacional de Inclusión sus principales componentes. La justificación del cambio por parte del gobierno fue planteada como una política social de nueva generación, más inclusiva, que trascienda el asistencialismo, incorpore la participación social, la inclusión productiva, enfatice la coordinación interinstitucional y entre órdenes de gobierno, y articule los esfuerzos institucionales para la atención efectiva de la pobreza (Hernández et al., 2019, p. 40). Otro elemento a destacar fue la fusión de prospera con el Programa de Apoyo Alimentario (PAL).

De manera conjunta lo programas Progresa-Oportunidades-Prospera fueron denominados como POP. Su evolución es resumida de la siguiente manera:

[La Gráfica 1 ilustra] la evolución de la cobertura de familias y localidades, y distingue entre 2 tipos de localidad. Se observa que, durante sus primeros tres años de operación, en el marco de la administración de Ernesto Zedillo, el programa incrementó su cobertura de forma vertiginosa de 300,000 a alrededor de 2.5 millones de hogares, predominantemente en localidades rurales.

En la administración de Vicente Fox se dio un nuevo impulso a la cobertura, y en 2004 llegó a cinco millones de hogares, ahora incluyendo localidades semiurbanas y urbanas, cifra que se mantuvo constante en los siguientes años de ese sexenio ante la convicción de que se había alcanzado a toda la población objetivo del programa. La siguiente ampliación de cobertura se llevó a cabo en 2010 en el sexenio de Felipe Calderón, y alcanzó cerca de seis millones de familias.

En los años posteriores, la cobertura de familias se sostuvo en torno a esa cifra, hasta 2016, cuando se fusionaron Prospera y el PAL, lo cual elevó el número de hogares beneficiarios y, en 2017, se redujo en forma ligera (...) Al cierre de 2017, según la información proporcionada por el programa, este atendía a alrededor 6.6 millones de hogares (27 millones de personas), que representaban alrededor del 22.7% de la población nacional, en cerca de 114,000 localidades de todas las entidades federativas(Hernández et al., 2019, pp.41-42). A pesar del incrementó la cobertura a los hogares de zonas urbanas, la cobertura hogares de zonas rurales sea mantenido al ser considerados más vulnerables. Es por esta razón que las acciones federales se han visto complementadas con políticas sociales estatales, destacándose aquéllos estados que cuentan con grandes centros urbanos buscando tener un mayor alcance en el combate de la pobreza. Bajo este contexto, la Gráfica 2 muestra que los resultados han sido heterogéneos, existiendo estados con un alto nivel de rezago (situados en el sureste y suroeste) y estados con bajo rezago (en especial los del noreste, el noroeste y la Ciudad de México).

La actual administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una fuerte orientación hacia la política social, Así lo señala el Plan Nacional de Desarrollo (PND) al mencionar:

Para edificar el bienestar de las mayorías se requería de una fuerte presencia del sector público en la economía, de enérgicas políticas recaudatorias y de una intervención estatal que moderara las enormes desigualdades sociales en las que desemboca de manera inevitable una economía de mercado sin control alguno. Así

pues, hasta hace unas décadas era normal y aceptado que en los países capitalistas industrializados el Estado detentara el monopolio de sectores estratégicos como las telecomunicaciones y los ferrocarriles, la operación de puertos y aeropuertos, los sistemas de pensiones y, por supuesto, los sistemas de educación y salud (Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 2019 p. 40)

A pesar de lo señalado en el PND, se han dejado de lado importantes avances logrados por administraciones previas. Tal es fue el caso del POP que fue sustituido por una serie de programas enfocados en el apoyo a adultos mayores a través de la entrega de transferencias monetarias y el otorgamiento de becas a estudiantes en los distintos niveles educativos. Los programas actuales cuentan con la peculiaridad de estar enfocados principalmente en el ámbito económico. La razón dada para esta decisión se justifica por la lucha contra la corrupción, debido a que existe la percepción por parte del actual gobierno que los apoyos otorgados a través de los programas sociales no llevaban a las poblaciones objetivo.

Respecto al combate de la pobreza multidimensional, el actual gobierno ha impulsado proyectos de infraestructura en la región sur de la República para tratar de dinamizar su economía. De esta manera, los recursos destinados a la política social han sido acotados a los apoyos económicos y los proyectos de infraestructura, sin que sea claro el vínculo existente entre ambas políticas para crear las sinergias necesarias que las complementen en el combate contra la pobreza. Esto ha significado un retroceso en la política social, llevándola a un estado similar al existente durante la década de los ochentas cuando estaba vigente el Pronasol.

Un año después de iniciada la administración de Andrés Manuel López Obrador, el mundo vivió una crisis económica sin precedentes. La crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (Covid 19) impuso un paro de actividades de las actividades productivas en diversos países del mundo siendo México uno de ellos. Esto se vio reflejado en la caída del producto y el aumento del desempleo.

De acuerdo con Salinas Maldonado (2021) el CONEVAL, estimó un aumento de entre 8,9 y 9,8 millones de personas que no pudieron cubrir el gasto de los alimentos básicos por la crisis de la covid-19, arrinconando a millones de personas a la pobreza, señalando la existencia de pérdidas importantes en los avances que se habían logrado en materia de desarrollo social. Adicionalmente, las políticas centradas en transferencias monetarias solo fueron una medida transitoria que no solucionaba los estragos provocados por la pandemia. Utilizando cifras publicadas por el CONEVAL, esto se tradujo en un aumento de 61 millones a 70 millones de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza.

Un marco teórico sólido proporciona un contexto conceptual y metodológico para abordar un problema de investigación. Al establecer conexiones entre conceptos, teorías y hallazgos previos, puede identificar lagunas en el conocimiento y sugerir nuevas direcciones de investigación. Inspiraría a nuevas líneas y áreas de investigación al ofrecer perspectivas frescas sobre el problema, promover la reflexión crítica y estimular la exploración de nuevas hipótesis y enfoques metodológicos. Además, al validar la importancia del problema dentro de un marco más amplio de conocimiento, puede fomentar el interés y la colaboración de otros investigadores en el campo.

#### VI. Formulación de la hipótesis

Se espera que exista una relación negativa entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México, donde niveles más altos de desigualdad económica se asocien con una menor participación política y comunitaria por parte de los ciudadanos. Esta relación puede estar mediada por factores como el acceso a recursos y oportunidades, la percepción de eficacia política y la confianza en las instituciones, así como por barreras estructurales y sociales que limitan la participación de ciertos grupos socioeconómicos.

Esta hipótesis sugiere que a medida que aumenta la desigualdad económica en la Ciudad de México, la participación ciudadana tiende a disminuir debido a una serie de factores que hacen más difícil para los ciudadanos involucrarse activamente en la vida política y comunitaria. La hipótesis también reconoce la complejidad de la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana, sugiriendo que esta relación puede estar influenciada por una variedad de variables y procesos sociales.

La unidad de análisis de esta investigación es multidimensional y abarca varios niveles de estudio. En primer lugar, a nivel macro, la unidad de análisis es la Ciudad de México en su conjunto. Esto implica que se examinarán datos y tendencias a nivel de toda la metrópolis para comprender cómo la desigualdad económica y la participación ciudadana se manifiestan en diferentes áreas geográficas, distritos y comunidades dentro de la ciudad.

L a unidad de análisis podría ser la comunidad o vecindario dentro de la Ciudad de México. Esto implica un enfoque más específico en cómo la desigualdad económica y la participación ciudadana varían entre diferentes áreas de la ciudad, teniendo en cuenta factores como la composición demográfica, la distribución de ingresos, la infraestructura comunitaria y la actividad política local.

A nivel micro, la unidad de análisis podría ser el individuo o el hogar. Esto implica analizar cómo las características individuales, como el nivel educativo, la edad, el género y la ocupación, influyen en la participación ciudadana y cómo estas características interactúan con la desigualdad económica para influir en los patrones de participación política y comunitaria.

Además, la investigación también podría considerar unidades de análisis más específicas, como organizaciones comunitarias, movimientos sociales o instituciones políticas locales, para comprender cómo estas entidades se ven afectadas por la desigualdad económica y cómo pueden influir en los patrones de participación ciudadana en la Ciudad de México.

La unidad de análisis de esta investigación es multidimensional y abarca varios niveles de estudio, desde la ciudad en su conjunto hasta comunidades específicas, individuos y organizaciones. Este enfoque permite una comprensión completa de la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México, así como de los factores y procesos que influyen en esta relación a diferentes niveles.

Las variables principales en esta investigación son la desigualdad económica y la participación ciudadana. La desigualdad económica puede medirse mediante indicadores como el coeficiente de Gini, el ingreso per cápita, la brecha salarial, la distribución de la riqueza y la pobreza relativa. Estas variables permiten cuantificar la disparidad en la distribución de recursos y oportunidades económicas entre los habitantes de la Ciudad de México. Por otro lado, la participación ciudadana puede ser medida a través de indicadores como la participación en elecciones, el activismo político, la membresía en organizaciones comunitarias, la asistencia a reuniones vecinales y la participación en protestas o manifestaciones. Estas variables capturan diferentes formas en las que los ciudadanos se involucran en la vida política, social y comunitaria de la ciudad.

Las características o propiedades de la unidad de análisis pueden variar según el nivel de análisis. La unidad de análisis puede incluir variables como la densidad de población, el tamaño del área urbana, la composición demográfica y la distribución geográfica de la ciudad. Las características pueden incluir la infraestructura comunitaria, el acceso a servicios básicos, la segregación espacial y la presencia de organizaciones civiles y políticas en diferentes vecindarios. A nivel micro, las características pueden incluir el nivel educativo, la ocupación, el ingreso familiar, la afiliación política y la participación anterior en actividades cívicas de los individuos o los hogares dentro de la ciudad. Estas características permiten entender cómo diferentes aspectos del entorno social, económico y político influyen en la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México.

Los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables se basan en la comprensión de cómo estas variables se manifiestan y operan en diferentes niveles de análisis dentro del contexto de la investigación sobre la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México.

En primer lugar, a nivel macro, las unidades de análisis más amplias, como la Ciudad de México en su conjunto, proporcionan un marco para comprender la distribución general de la desigualdad económica y los patrones de participación ciudadana en toda la metrópolis. Aquí, las variables macroeconómicas y sociopolíticas, como el coeficiente de Gini, el producto interno bruto (PIB) per cápita y los resultados de las elecciones, ofrecen una visión general de la desigualdad económica y la participación política a gran escala.

Las unidades de análisis más específicas, como los vecindarios o comunidades dentro de la ciudad, permiten una comprensión más detallada de cómo la desigualdad económica y la participación ciudadana varían según el contexto local. Aquí, las variables como la densidad de población, la disponibilidad de servicios públicos, la infraestructura comunitaria y la presencia de organizaciones civiles y

políticas,	proporcionan	nuevas	líneas	de	investigación	sobre	cómo	los	factores
locales influyen en la relación entre la desigualdad y la participación.									

### VII. Pruebas cuantitativas y/o cualitativas de la hipótesis

El presente estudio se enfoca en investigar la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México. Una comprensión detallada de esta relación es esencial para abordar los desafíos socioeconómicos y políticos que enfrenta la ciudad. En este apartado, nos centramos en las pruebas cuantitativas utilizadas para analizar los datos recopilados.

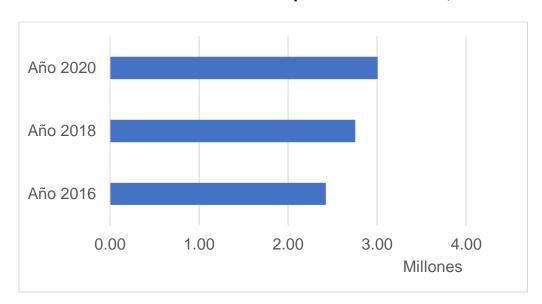
Estas pruebas nos permitirán examinar de manera sistemática y rigurosa la asociación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana, así como identificar posibles patrones, tendencias y factores que influyen en esta relación. A través de un enfoque cuantitativo, buscamos proporcionar una base empírica sólida para comprender mejor estos fenómenos y informar el desarrollo de políticas públicas y programas de intervención dirigidos a promover una participación ciudadana más inclusiva y equitativa en la Ciudad de México.

En esta sección, describimos las pruebas estadísticas utilizadas, así como los procedimientos de análisis de datos aplicados, con el objetivo de ofrecer una visión clara y detallada de nuestra metodología de investigación. Y es en este sentido, como se presenta en la **Gráfica 1**, la población en situación de pobreza en la CDMX para el año 2016, 2018 y 2020.

Para analizar estos datos sobre la población en situación de pobreza en la Ciudad de México en los años 2016, 2018 y 2020, podemos observar la evolución de este indicador a lo largo del tiempo; en 2016, la población en situación de pobreza era de 2,424,660 personas; en 2018, esta cifra aumentó a 2,755,918 personas; para el año 2020, se registró un nuevo incremento, alcanzando un total de 3,009,394 personas en situación de pobreza.

El aumento progresivo de esta población indica un desafío significativo en términos de bienestar social y económico en la región. Este análisis sugiere la necesidad de

políticas y programas dirigidos a abordar la pobreza y sus causas subyacentes en la Ciudad de México.



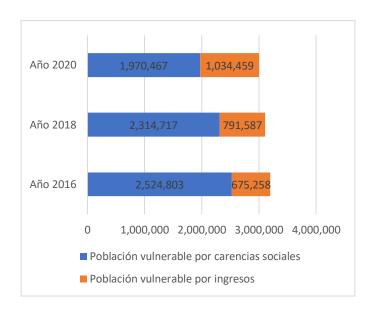
Gráfica 1. Población en situación de pobreza en la CDMX, 2016-2020

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, 2020

Para analizar estos datos sobre la población vulnerable por carencias sociales y la población vulnerable por ingresos en la Ciudad de México en los años 2016, 2018 y 2020, podemos observar la evolución de ambos indicadores a lo largo del tiempo, como se observa en la **Gráfica 2.** 

Para la población vulnerable por carencias sociales, en 2016, había 2,524,803 personas en situación de vulnerabilidad por carencias sociales. Para 2018, esta cifra disminuyó a 2,314,717 personas. Finalmente, en 2020, el número continuó disminuyendo, llegando a 1,970,467 personas.

Gráfica 2. Población que tienen carencias sociales y carencias del ingreso CDMX, 2016-2020



Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, 2020

En cuanto a la Población vulnerable por ingresos: en 2016, había 675,258 personas en situación de vulnerabilidad por ingresos. Esta cifra aumentó a 791,587 personas en 2018. Para 2020, se registró un nuevo incremento, alcanzando un total de 1,034,459 personas en situación de vulnerabilidad por ingresos.

Este análisis revela patrones divergentes entre la población vulnerable por carencias sociales y la población vulnerable por ingresos en la Ciudad de México. Mientras que la población vulnerable por carencias sociales ha experimentado una disminución durante el período considerado, la población vulnerable por ingresos ha mostrado un aumento progresivo. Estos hallazgos destacan la importancia de abordar tanto las necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad como las desigualdades económicas que contribuyen a la vulnerabilidad por ingresos en la Ciudad de México.

Es importante poder realizar una comparación entre la participación ciudadana y la dificultad que la calidad de ingresos que tienen las diferentes personas. En la

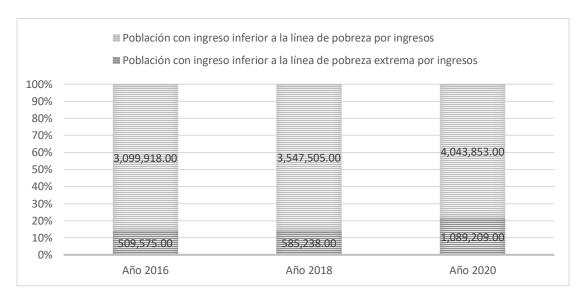
**Gráfica 3**, se observa el porcentaje de población con ingresos por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema por ingresos en la Ciudad de México.

Observamos un aumento en el número de personas que viven por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos, pasando de 509,575 en 2016 a 1,089,209 en 2020. Esto sugiere un empeoramiento en las condiciones de vida de una parte significativa de la población capitalina durante ese período.

Además, la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza también experimentó un aumento notable, pasando de 3,099,918 en 2016 a 4,043,853 en 2020. Esto indica una expansión de la pobreza en general en la Ciudad de México a lo largo de los años estudiados.

Este análisis social subraya la necesidad urgente de políticas y programas dirigidos a abordar la pobreza y la desigualdad en la Ciudad de México. La creciente población en situación de pobreza extrema y pobreza generalizada plantea desafíos significativos en términos de bienestar social, acceso a servicios básicos, educación, salud y oportunidades de empleo. Es crucial implementar medidas efectivas para combatir estas tendencias y garantizar un desarrollo más equitativo y sostenible en la metrópolis.

Gráfica 3. Porcentaje de población con ingresos por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema por ingresos CDMX, 2016-2020



Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, 2020

Siguiendo esta línea, se puede observar que existe una gran población con un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Es por demás importante, observar que no solamente existen carencias por ingresos,

En la **Gráfica 4,** podemos observar que existen diversas carencias sociales. La primera de ellas es que en el año 2016, se registraron 811,313 personas con rezago educativo en la ciudad. Este número aumentó ligeramente a 865,118 en 2018 y continuó creciendo a 878,033 en 2020.

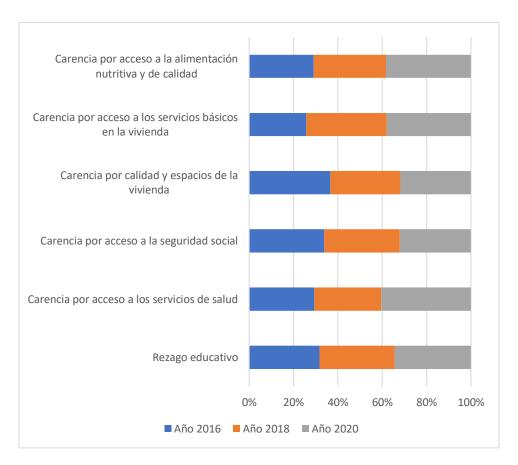
Este incremento en la población con rezago educativo es preocupante, ya que sugiere dificultades persistentes en el acceso a la educación y la finalización de estudios en la Ciudad de México. El rezago educativo puede tener consecuencias significativas en el desarrollo individual y socioeconómico, limitando las oportunidades laborales y el progreso personal de quienes lo experimentan.

También, en el año 2016, había 1,789,755 personas con carencia por acceso a los servicios de salud en la ciudad. Este número aumentó ligeramente a 1,844,580 en

2018 y experimentó un aumento significativo a 2,468,221 en 2020. Este incremento en la población con carencia por acceso a los servicios de salud sugiere dificultades persistentes en la accesibilidad y disponibilidad de servicios de salud en la Ciudad de México. La falta de acceso a servicios de salud adecuados puede tener consecuencias graves en la salud y el bienestar de la población, aumentando el riesgo de enfermedades no tratadas, discapacidades y una menor calidad de vida.

En el año 2016, se registraron 538,480 personas con al menos una carencia por calidad y espacios de la vivienda en la ciudad. Sin embargo, este número disminuyó a 466,914 en 2018, solo para aumentar ligeramente a 467,090 en 2020. La variabilidad en estos datos puede indicar fluctuaciones en las condiciones de vivienda en la Ciudad de México durante este período. Si bien la disminución en el número de personas con esta carencia entre 2016 y 2018 puede ser un indicador positivo de mejoras en la calidad de la vivienda o políticas dirigidas a abordar estas carencias, el ligero aumento en 2020 sugiere una estabilización o incluso un retroceso en estas mejoras.

Gráfica 4. Porcentaje de población por diversas carencias en la CDMX, 2016-2020



Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, 2020

En la **Gráfica 5**, podemos observar el porcentaje de participación de la ciudadanía en al menos alguna rama para el año 2020, podemos observar las distintas formas de participación y su nivel de prevalencia, que por lo menos una vez en su vida lo han realizado. Se puede observar que el 27.38% de la población a firmado una petición para solicitar algún servicio o la solución de algún problema. Es una forma relativamente sencilla de involucrarse en asuntos públicos.

También se puede observar el porcentaje de población que trabajó con otras personas para resolver problemas de la comunidad: Esta forma de participación, con un 22.14%, implica un nivel más activo de involucramiento, trabajando en

colaboración con otros para abordar desafíos locales; reunirse con las autoridades con un 18.48%, refleja un interés en la interacción directa con funcionarios para discutir temas de interés público.

También, recurrir a un partido político, aunque menos común, el 10.81% de la población participa a través de partidos políticos, buscando influir en la toma de decisiones a nivel político; participado en una protesta, la participación en protestas, con un 9.35%, indica un nivel de descontento y disposición a expresar opiniones y demandas a través de manifestaciones públicas.

Gráfica 5. Porcentaje de población que ha participado en algún asunto público por lo menos una vez en su vida en la CDMX



Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2020

Se puede observar que también la población ha buscado apoyo de una organización social: Esta forma de participación, con un 7.79%, demuestra la confianza en las organizaciones sociales como agentes de cambio y apoyo en la búsqueda de soluciones a problemas; presionado a través de redes sociales, el 7.25% de la población recurre a las redes sociales como una plataforma para ejercer presión y promover cambios en la sociedad.

Acudido a los medios de comunicación: Una minoría, el 4.73%, utiliza los medios de comunicación como medio de participación para difundir información y generar conciencia sobre problemas específicos. Se ha unido a una huelga: Con un 4.54%, la participación en huelgas muestra un compromiso con causas específicas y una disposición a tomar medidas colectivas. Bloqueados lugares públicos, carreteras, calles o avenidas: Esta forma de protesta, con un 3.98%, implica acciones más directas para llamar la atención sobre problemas y demandas.

En la **Gráfica 6**, se puede observar el porcentaje de participación por ámbito de vivienda de las personas seleccionadas como funcionarios de casilla en algún proceso electoral en la Ciudad de México. Observamos que:

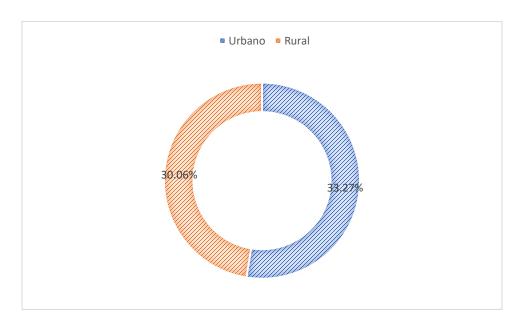
- En el ámbito urbano, el 33.27% de las personas han sido seleccionadas como funcionarios de casilla.
- En el ámbito rural, este porcentaje es ligeramente menor, con un 30.06%.

Este análisis sugiere que hay una mayor proporción de personas en áreas urbanas que han sido seleccionadas como funcionarios de casilla en comparación con las áreas rurales. Esto puede deberse a una serie de factores, como la densidad de población, la disponibilidad de recursos humanos capacitados y la distribución geográfica de la población.

Es importante tener en cuenta que la participación de los ciudadanos como funcionarios de casilla es crucial para el proceso electoral, ya que garantiza la transparencia y la legitimidad de las elecciones. Sin embargo, es necesario

promover la participación equitativa en todos los ámbitos de vivienda para garantizar una representación justa y adecuada en el proceso electoral.

Gráfica 6. Porcentaje de población que han sido funcionarios de casilla en la CDMX



Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2020

Los datos presentados sugieren que existe una correlación significativa entre la participación ciudadana y la desigualdad. La mayor participación en áreas urbanas, donde generalmente se concentran mayores recursos económicos y educativos, podría indicar que la desigualdad económica influye en la disposición de la población para involucrarse en procesos electorales y actividades cívicas.

Además, la disparidad en la participación entre la población con carencias sociales y el área de vivienda puede estar relacionada con diferencias en el acceso a recursos y oportunidades socioeconómicas, lo que subraya la importancia de abordar las desigualdades económicas como un factor clave para fomentar una participación ciudadana más equitativa. Este hallazgo destaca la necesidad de políticas y programas que busquen mitigar la brecha socioeconómica y promover la

inclusión de decisiones.	todas	las	comunic	dades	en	los	proces	os (	democ	ráticos	y la	toma	de

#### VIII. Conclusiones

A través de la investigación se puedo observar un panorama complejo y multifacético que aborda la interacción entre la distribución socioeconómica y la participación cívica en la metrópolis mexicana. Tras analizar una variedad de datos y métricas, se han extraído varias conclusiones significativas que arrojan luz sobre la dinámica entre estos dos elementos fundamentales de la sociedad.

Se ha observado una clara correlación entre la desigualdad económica y los niveles de participación ciudadana. Los datos revelaron que las áreas urbanas, donde generalmente se concentran mayores recursos económicos y educativos, exhibieron una mayor participación en actividades cívicas y procesos electorales en comparación con las áreas rurales. Esto sugiere que la distribución socioeconómica influye en la disposición de la población para involucrarse en la esfera pública y que las disparidades económicas pueden actuar como barreras para la participación equitativa.

Además, se identificaron diferencias significativas en las formas de participación ciudadana entre los distintos estratos socioeconómicos. Mientras que algunas formas de participación, como firmar peticiones o trabajar en colaboración con otras personas para resolver problemas comunitarios, eran más comunes en áreas urbanas y entre personas con mayores niveles de educación y recursos económicos, otras formas de participación, como recurrir a un partido político o unirse a una huelga, eran menos frecuentes y estaban más asociadas con poblaciones marginadas y desfavorecidas.

Estas conclusiones subrayan la importancia de abordar la desigualdad económica como un factor determinante en la participación ciudadana y la salud democrática en la Ciudad de México. Para promover una participación más equitativa y fortalecer el tejido social, es crucial implementar políticas y programas que reduzcan las

disparidades socioeconómicas y mejoren el acceso a oportunidades educativas, económicas y políticas para todos los ciudadanos. Además, es necesario fomentar una cultura cívica inclusiva que valore y promueva la participación de todas las comunidades, independientemente de su estatus socioeconómico o ubicación geográfica.

Además, se observó que la participación ciudadana en la Ciudad de México está influenciada por una variedad de factores contextuales, incluida la accesibilidad a recursos y servicios básicos, la confianza en las instituciones públicas y la percepción de eficacia política. Estos hallazgos resaltan la importancia de adoptar un enfoque integral y holístico para comprender y abordar los desafíos relacionados con la participación ciudadana en la metrópolis. Es fundamental que las políticas y programas diseñados para fomentar la participación ciudadana tengan en cuenta estos factores contextuales y adopten enfoques adaptados a las necesidades y realidades específicas de cada comunidad y grupo demográfico.

Asimismo, se destacó la importancia de promover la inclusión y la diversidad en la participación ciudadana, reconociendo y valorando las diferentes formas de participación y los diversos puntos de vista y experiencias de los ciudadanos. Esto implica garantizar la representación equitativa de grupos marginados y subrepresentados en los procesos de toma de decisiones y la creación de espacios inclusivos y accesibles para la participación cívica. La diversidad en la participación no solo enriquece el proceso democrático, sino que también contribuye a la legitimidad y efectividad de las políticas y programas implementados.

El título que podría seguir la problemática de la investigación es "Perspectivas para una Participación Ciudadana Equitativa: Abordando la Desigualdad Económica en la Ciudad de México". Este título refleja la continuidad de la investigación, centrándose en explorar las posibles soluciones y estrategias para promover una participación ciudadana más inclusiva y equitativa en la metrópolis, con un enfoque específico en abordar las disparidades socioeconómicas que

oueden actuar como barreras para la participación plena y significativa de todos l ciudadanos.	os

#### Posibles soluciones

Para abordar la problemática de la relación entre la desigualdad económica y la participación ciudadana en la Ciudad de México, se pueden considerar diversas soluciones:

- 1. Acceso equitativo a la educación: Implementar políticas que garanticen un acceso igualitario a la educación de calidad en todas las áreas de la ciudad, proporcionando oportunidades de aprendizaje tanto en entornos urbanos como rurales. Esto puede incluir la inversión en infraestructura educativa, programas de becas y apoyo académico para comunidades desfavorecidas.
- 2. Promoción de la conciencia cívica: Desarrollar campañas de concienciación y educación cívica que informen a la población sobre la importancia de la participación ciudadana en la democracia y los procesos electorales. Estas campañas pueden incluir talleres, seminarios y materiales educativos accesibles para todos los grupos demográficos.
- 3. Fomento de la inclusión política: Implementar medidas para aumentar la representación y participación de grupos marginados y subrepresentados en la vida política y pública, incluidas mujeres, jóvenes, personas de bajos ingresos y comunidades indígenas. Esto puede incluir la adopción de cuotas de género, incentivos fiscales para partidos políticos que promuevan la diversidad y programas de capacitación para líderes comunitarios.
- 4. Mejora del acceso a la información: Garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a información relevante y transparente sobre los procesos electorales, las políticas públicas y los asuntos de interés público. Esto puede incluir la expansión de la infraestructura de comunicación, la promoción del periodismo independiente y la utilización de tecnologías de la información y comunicación para difundir información de manera accesible y comprensible.

5. Fortalecimiento de la sociedad civil: Apoyar y fortalecer el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de la participación ciudadana y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Esto puede incluir la financiación de proyectos comunitarios, la capacitación de líderes locales y la colaboración con organizaciones de base para desarrollar iniciativas que aborden las necesidades y preocupaciones de la comunidad.

Al implementar estas soluciones de manera coordinada y sostenida, se puede avanzar hacia una mayor equidad en la participación ciudadana en la Ciudad de México, promoviendo una democracia más inclusiva y representativa.

#### IX. Bibliografía

CNDH. (2019). Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del artículo 1o constitucional. In Estudio de Derechos Humanos y Pobreza. https://bit.ly/3afMVR1

CONEVAL. (2020). Informe de pobreza y evaluación 2020, Ciudad de México. https://bit.ly/3sKuiek

Cortés, L. (2022). La pobreza en las alcaldías de la CDMX: distintas realidades. Nexos. https://bit.ly/3sPj48u

Engel, W. (2006). Políticas integrales de reducción de la pobreza: el desafío de la efectividad. In Políticas efectivas para erradicar la pobreza: desafíos institucionales, de diseño y de monitoreo (pp. 7–47). Banco Interamericano de Desarrollo. https://bit.ly/38A1hLK

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial de la Federación 75 (2019).

https://www.dof.gob.mx/nota\_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

Gómez, K. (2009). La política contra la pobreza en México Ventajas y desventajas de la línea oficial a la luz de experiencias internacionales. Gestion y Politica Publica, 18(1), 107–148.

Hernández, G., De la Garza, T. P., Zamudio, J., & Yaschine, I. (2019). El Progresa-Oportunidades-Prospera a 20 años de su creación. In Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/chiapas/Paginas/pob\_muni cipal.aspx

Martínez Flores, B. V., & Benavides Rincón, G. (2018). De Pronasol a la Cruzada. ¿Qué hay de nuevo sobre coordinación? Espiral Estudios Sobre Estado y Sociedad, 25(71), 73–111. https://doi.org/10.32870/espiral.v25i71.6179.g6135

Naciones Unidas. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe Gracias por su interés en esta publicación de la CEPAL. https://bit.ly/3wID1ir

Salinas Maldonado, C. (2021, February 9). La pobreza en México aumenta pese a los programas sociales del Gobierno. El País. https://bit.ly/3PCL9th

Siscar, M. (2015). Las políticas contra la pobreza en México: 20 años de combate fallido. Animal Político. https://bit.ly/3wyjl0A

Verdera, F. (2007). Las políticas para enfrentar la pobreza. In La pobreza en el Perú: un análisis de sus causas y de las políticas para enfrentarla (pp. 243–281). CLACSO. https://bit.ly/3a7Tchv

Es una investigación de análisis del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México.

Registro ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor en trámite

Partido Acción Nacional en la Ciudad de México

Durango No. 22, Col. Roma, C.P. 06400, México, CDMX.